

Susana Hintze

Les excluidos del sistema

Revista Encrucijadas, N°4, UBA, Mayo 1996.

Desocupación y sectores populares

La desocupación y las diversas variantes de la precariedad laboral confluyen en una situación que recorta los márgenes para el desarrollo de estrategias de sobrevivencia, lo cual amplía necesariamente la zona de vulnerabilidad social, ensanchando el camino hacia la exclusión.

Las cifras del 18% de desocupación en mayo del '95 se convirtieron en tema predominante en los medios durante varios meses y tiñeron el discurso político y económico durante el resto del año. Su disminución al 16% en la onda de octubre de la Encuesta Permanente de Hogares no alteró el hecho de que la Argentina había incrementado sus tasas de desocupación en un 72% entre mayo de 1994 y el mismo mes de 1995 y un 34% entre los meses de octubre de esos años. Desde 1989, año álgido de la hiperinflación y los saqueos, la variación corresponde a un 114%¹.

A pesar de su dramatismo, las cifras de desocupación reflejan sólo parte –si bien la más dura- del proceso de subutilización de la fuerza de trabajo que enfrenta el país; a ellas hay que agregarles las diversas variantes de la precariedad laboral: subocupación, inestabilidad, trabajo en negro, entre otras. La tasa de subocupación (referida a aquellos que trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias y desean trabajar más) fue del 11% en mayo y del 13% en octubre de 1995. Estas cifras indican que –sin considerar las otras formas de precariedad mencionadas- cerca de un tercio de la población económicamente activa no trabaja o lo hace menos de lo que desearía.

Trabajo e Integración social

Grupos de pobres sin trabajo deambulando por los caminos de Europa conforman una buena imagen de los orígenes del capitalismo industrial y de su proceso de acumulación originaria. La existencia de desocupados, de un “ejército industrial de reserva” presionando sobre el mercado de trabajo, acompaña su desarrollo. Sin embargo, durante largos períodos de este siglo, su capacidad de organizar la

¹ Datos para los 25 aglomerados urbanos (año base 1989 y 1994 = 100). Aparte de las razones coyunturales, la tasa de desocupación ha disminuido sistemáticamente por efectos estacionales entre las mediciones de mayo y octubre, salvo en los momentos de ruptura en la magnitud de la serie (octubre de 1975, 1981, 1992 y 1994). Ver INDEC, 1995.

sociedad y el Estado deviene de haber hecho coincidir en gran parte la lógica de la reproducción del capital con la reproducción de la vida de grandes masas poblacionales a través del trabajo asalariado.

Como “ideal integrador”, es en el objeto del pleno empleo del capitalismo de base keynesiana donde este papel del trabajo es llevado a sus límites (por lo menos teóricamente). Para Keynes un determinante del empleo es la “demanda efectiva” que depende, a su vez, del comportamiento y las decisiones de los capitalistas, más que del mercado laboral. En ese marco, el nivel de empleo resulta de las inversiones productivas que, en parte –y fundamentalmente en sectores de riesgo– realizó el Estado. En términos teóricos, este modelo no contempla excluidos: el pleno empleo es, entonces, una “posibilidad potencial” porque se relaciona con la expectativa de ganancia del empresario y el proceso de crecimiento global (Grassi, Hintze, Neufeld, 1994).

En este modelo, el Estado juega un papel central tanto en la regulación del mercado de trabajo como en la extensión y desarrollo de una amplia gama de políticas sociales que les garantizan a los ciudadanos el derecho a la educación, la salud, vivienda y transporte subvencionado, prestaciones de la seguridad social, etc. La reproducción de los asalariados deviene, entonces, tanto del salario directo, producto de una relación laboral determinada, como del “salario indirecto” o social.

La concepción neoliberal que sustenta el capitalismo de fin del presente siglo centra su crítica en esta forma de Estado y sociedad a la que considera responsable de la crisis del modelo que empieza a hacerse evidente desde los '70. La reestructuración capitalista en curso ha abandonado el ideal del pleno empleo y convive con altas tasas de desocupación y precariedad laboral. Tanto en términos teóricos como empíricos, en este nuevo modelo la exclusión de amplios sectores sociales del mercado de trabajo y del consumo individual y colectivo constituye una posibilidad que se acrecienta cada vez.

El trabajo como elemento básico de integración social y constitutivo de la identidad cultural ha perdido su lugar sin que se desarrollen alternativas de reemplazo. “La organización y la disciplina capitalista del trabajo se han constituido como ‘naturales’ y alcanzado al conjunto de la vida social, operando como movimiento histórico cada vez más inclusivo, tanto en términos de los ámbitos de la vida organizados en función de tal disciplina, como de los grupos sociales alcanzados. Cuando las propias condiciones de la producción rompen con la ‘naturalidad’ de éstas, sin transformaciones culturales que hagan posible que el tiempo y las potencialidades se reencaucen en ámbitos de la producción humana, socialmente valorable, aunque no se articulen al mercado (la producción artística, intelectual,

etc.), los productores son desocupados y la vida entera queda a la deriva, tanto en términos de la sobrevivencia (propia y de la familia) como de la identidad adulta” (Grassi, 1995).

Pobreza y exclusión

En una reflexión pensada desde lo que acontece en los países centrales, Robert Castel entiende a la pobreza como un “estado”, de cuyas formas puede elaborarse un inventario de carencias. Considera a estas situaciones de carencia como un “efecto” situado en la conjunción de dos vectores: por un lado, “un eje de integración-no integración con respecto al trabajo, es decir, la relación con los medios por los cuales un individuo logra (o no logra) reproducir su existencia en el plano económico”; por el otro, “un eje de inserción-no inserción en una sociabilidad socio-familiar, es decir, la inscripción (o la ruptura) con respecto al sistema relacional en el seno del cual él reproduce su existencia en el plano afectivo y social” (Castel, 1991).

Si se acoplan estos valores de dos en dos se obtienen tres zonas, de menor a mayor riesgo social: la zona de integración, la de vulnerabilidad y la de desafiliación. Las situaciones de desafiliación se establecen en la intersección de ese doble proceso de no integración en el campo del trabajo y de no inserción en una red de protección próxima.

Según este autor, lo que caracterizó a la sociedad de los países industrializados hasta los años 70 es la estabilidad de las situaciones de vulnerabilidad (precariedad laboral y fragilidad de los soportes relacionales, situación intermedia entre la integración y la desafiliación). La marginalidad representaba un factor residual en una formación social globalmente integrada. El pleno empleo y el crecimiento económico, el derecho a la asistencia y ayuda social para las principales categorías dependientes, seguros ligados al trabajo para la mayoría de los demás, constituían los recursos con que el Estado de Bienestar lograba esta estabilidad.

Con la nueva situación, encuentra un recrudecimiento de la vulnerabilidad a partir de una reestructuración del aparato productivo que ha excluido del mercado de trabajo a alrededor de una décima parte de la fuerza de trabajo en Francia, llevándola a la desocupación o a la recurrencia de períodos de desocupación y de empleos precarios (Castel, 1991). Cabe recordar que en los países centrales, medidas compensatorias como seguros de desempleo o el “ingreso mínimo de inserción” en el caso francés morigeran su incidencia sobre la sobrevivencia de los afectados y sus familias.

La situación en nuestros países es aún mucho más dura. ¿Hay mayor desamparo que el de enfrentar la desocupación para aquellos sectores sociales que históricamente viven conviven con la pobreza y a los cuales la desocupación continuada los sume en la imposibilidad de acceder a las formas más elementales del consumo? ¿A estos pobres entre los pobres, les queda ya algo por vender más allá de su aparentemente invendible fuerza de trabajo? ¿Hay aún márgenes de solidaridad familiar, barrial, comunitaria en los cuales apoyar la sobrevivencia?

Sectores populares, trabajo y desocupación

En las áreas urbanas, la posibilidad de acceder al consumo, incluso el alimentario, depende de la adquisición en el mercado de los bienes y servicios necesarios para la subsistencia de los individuos y las familias. Por lo tanto, el consumo es una función del ingreso y el precio de los bienes. La capacidad de incidir sobre estas dos variables tiene diferentes características. Obviamente, la fijación del precio no es una atribución de los consumidores, que en todo caso pueden (potencialmente) conseguir mejores precios a través de un esfuerzo de búsqueda de aquellos negocios que ofrecen los artículos con diferencias relativas favorables². El ingreso es, entonces, la variable fundamental que hace posible acceder a un consumo que permita la satisfacción socialmente aceptable de los bienes y servicios necesarios para la reproducción. El ingreso, para la mayoría de la sociedad, es producto del trabajo. Y la desocupación su expresión más negativa, aunque (y es preciso reiterarlo) no la única. Los márgenes de incidencia individual sobre el ingreso están también determinados por el comportamiento del mercado, en este caso el de trabajo.

Independientemente del criterio de definición y medición que se utilice, si se define a la pobreza como un inadecuado acceso a la satisfacción de las necesidades, los sectores en situación de pobreza son aquellos que tienen menos éxito en la batalla por trabajo e ingreso.

La distinción entre “pobres estructurales” que no satisfacen una serie de necesidades básicas y “pauperizados” o pobres por ingreso³ apunta a características que en buena parte se cruzan y que en todo caso muestran que los

² En la realidad, a menor capacidad de ingreso (y esto incluye tanto nivel como estabilidad en la percepción), menos es también la posibilidad de conseguir “buenos” precios en el consumo cotidiano, lo cual requiere disponibilidad de tiempo, desplazarse, transportar los comprado, a pagar al contado en el supermercado, etc. (Colman, Hintze y otros, 1992).

³ La construcción de los indicadores de “Necesidades Básicas Insatisfechas” toma como criterios básicos el hacinamiento, tipo de casa y servicios sanitarios, educación y su combinación. La determinación de los sectores pauperizados requiere de una canasta de tipo normativo compuesta por bienes y servicios que respeten las pautas de consumo de una sociedad en un momento determinado. El valor de esta canasta marca la “línea de pobreza” por debajo de la cual los hogares son considerados pobres (INDEC 1990).

pobres estructurales, independientemente de su ingreso en el momento de la medición, son aquellos que históricamente han tenido dificultades para alcanzar niveles mínimos de “acumulación” familiar (una vivienda con baño y pisos adecuados, por ejemplo), situación no independiente del ingreso.

Como es de esperar, entonces, la situación laboral repercute sobre los niveles de pobreza por ingreso. Sobre su magnitud se dispone de información para el Gran Buenos Aires (Capital Federal y el Conurbano). En octubre de 1995, la EPH registró en el GBA un 25% de pauperizados (y 17% de pobres estructurales). Afinando el análisis según su distribución espacial, la situación cambia a medida que los partidos se alejan de la Capital Federal: los valores para el Conurbano son respectivamente del 30% y el 21%. En aquellos más críticos, la pobreza alcanza el 67% de la población (38% por debajo de la línea de pobreza y 29% de NBI)⁴. Estas cifras muestran la reversión de la tendencia decreciente que presentaba el indicador de pauperización a partir de su pico máximo en octubre de 1989 (56% para el Conurbano en su conjunto), siendo de 24% en mayo de 1992 (Secretaría de Programación Económica, 1992).

En nuestros países, la reproducción familiar de los sectores populares “es un proceso complejo donde producción y reproducción forman un núcleo inseparable para contribuir a la sobrevivencia”. A los ingresos provenientes del mercado de trabajo, se les suman otras fuentes de ingresos monetarios y no monetarios. Dentro de las primeras, se incluyen actividades ligadas al mercado urbano – incluyendo al barrio-, ya sea como formas de autogeneración de empleo o venta de bienes y servicios, sin excluir tampoco actividades ilegales o transferencias institucionales, estatales o de otro tipo. Las fuentes no monetarias engloban otras posibilidades como la autoproducción de bienes, no sólo alimentarios, y las diversas relaciones de solidaridad, redes familiares, vecinales, de compadrazgo. Más allá de la diversidad de recursos utilizados, la pobreza está asociada a ingresos del trabajo, y las inserciones laborales de los sectores populares son un elemento básico de sus estrategias familiares. (Lacabana, 1992).

Estudios realizados en diversos países de América Latina muestran que para los sectores populares, la búsqueda de mayores ingresos se apoya en diversas alternativas, entre las que se destacan la extensión de las jornadas laborales y el desarrollo de trabajos secundarios por parte del jefe de hogar; la de incorporar al mercado de trabajo a todos los miembros posibles de la unidad doméstica, en especial la madre y los hijos adolescentes, y la búsqueda de otras fuentes de

⁴ Corresponden al GBA2 que abarca los anteriores partidos de A. Brown, Berazategui, E. Echeverría, G. Sarmiento, F. Varela, La Matanza, Merlo, Moreno, San Fernando y Tigre (INDEC, 1995a).

ingresos no laborales (Margulis y Tuirán, 1986; Cariola, 1992; Colman, Hintze y otros, 1992).

Todas estas alternativas se inscriben en un contexto macrosocial que las limita y condiciona. Los datos de desocupación indicados al comienzo de la nota y los que figuran a continuación para el Gran Buenos Aires son expresivos de las dificultades con que se enfrentan los sectores populares en el desarrollo de estas alternativas:

- a. Las tasas de subocupación (que al contrario de las de desocupación crecieron entre mayo y octubre de 1995) muestran la situación con que se encuentran las familias que deben compensar la desocupación de algún miembro con la ampliación del trabajo de los ocupados o que intentan recurrir a estrategias como las mencionadas para completar sus ingresos. Coincidentemente con el aumento crítico de la desocupación, los subocupados demandantes de mayor trabajo superan a los que no lo hacen. Si en octubre de 1991 la tasa de subocupación horaria demandante era del 3% y la no demandante del 5%, en octubre pasado la relación se invierte: una tasa de demandantes del 8% se contrapone a una de no demandantes del 5% (INDEC, 1995b).
- b. Las mayores tasas de desocupación corresponden a ramas de actividad que absorben en forma predominante a sectores que históricamente han tenido una inserción precaria en el mercado de trabajo. En el último relevamiento se observa una tasa de desocupación del 33% para la construcción y del 25% para el servicio doméstico. Estas ramas, a su vez, son las que presentan un incremento más pronunciado a lo largo de la década; en 1991, esos valores eran respectivamente 6% y 4% (INDEC, 1995b).
- c. A su vez, la desocupación castiga especialmente a las mujeres y los jóvenes. También para el GBA, una tasa general de desocupación del 17%, a las mujeres les correspondió el 20% (frente al 16% de los varones) y a los jóvenes de 15/19 años de 42% (INDEC, 1995a).

Para las familias populares, la contracción del mercado de trabajo con las características que asume en la Argentina tiene un doble efecto: el más directo se expresa en la disminución de la posibilidad de conseguir empleo en relación de dependencia o como cuentapropista, haciendo changas, etc., afectando sobre todo a las mujeres y los jóvenes; otro menos inmediato se refiere a la contracción de la oferta dentro y fuera del barrio cuando se pretende compensar la disminución de esta fuente de ingresos por la venta de bienes (ropa, cosméticos, vajilla) vendidos en cuotas a domicilio suele ser una ocupación femenina. Correlativamente, la instalación de pequeños negocios en

una habitación delantera de la vivienda constituye una actividad más familiar. Esto es válido también para la estrategia de enajenar los propios bienes en coyunturas de crisis (radios, televisores, heladeras).

En un contexto prolongado de privación económica y social como la que enfrentan los sectores populares, el incremento de los niveles de precariedad laboral hace que la posibilidad de una familia con miembros desocupados de apoyarse en la solidaridad familiar, barrial, comunitaria, se vea cada vez más restringida⁵.

A su vez, la retracción del papel del Estado como compensador de los avatares a los que el mercado somete a los trabajadores hace aún más crítica la situación e las familias populares, en tanto a las dificultades para obtener ingresos monetarios, se suma así la de acceder al salario social.

En definitiva las condiciones macro-estructurales reseñadas están recortando los márgenes para el desarrollo de estrategias de sobrevivencia y esto redundará necesariamente en una ampliación de la zona de vulnerabilidad social, ensanchando el camino hacia la exclusión.

En ese sentido, que las tasas de desocupación disminuyan debida a que la gente no busca trabajo –desalentada por los reiterados fracasos o por el tipo de trabajo e ingresos ofertados, o imposibilitada por el costo de salir a buscarlo- constituye un ejemplo límite de la aceptación de la exclusión por parte de quienes la soportan.

En sentido inverso, cabe preguntarse cuál es la magnitud –pero sobre todo la naturaleza- de la exclusión social que el resto de la sociedad está dispuesto a aceptar.

Bibliografía

- Cariola, C. (coord.), 1992: Sobrevivir en la pobreza: el fin de una ilusión. CENDES-Nueva Sociedad, Caracas.
- Castel, R. , 1991: "Los desafiados: la nueva cuestión social". Revista Topia año 11. Nro 2, Buenos Aires.

⁵ Un estudio realizado en Venezuela a fines de la década pasada muestra situaciones típicas para toda la región. Frente a la insuficiencia de los ingresos domésticos, las estrategias de sobrevivencia tienen efectos cada vez más limitados, de manera tal que las restricciones en el consumo se convierten en la única salida posible. Las estrategias, orientadas a la lógica de subsistencia diaria, se vuelven cada vez más inmediatistas priorizando el consumo de alimentos por sobre otros rubros y relegando los proyectos de más largo plazo como la educación y el equipamiento de la vivienda (Cariola, 1992).

- Colman, Hintze, Lapsenson, Perez Habiaga y Equia (1992): “La problemática agroalimentaria argentina”. Estudios e investigaciones Nro 8, Facultad de Humanidades, UNLP.
- Grassi, E., 1995: Trabajo y políticas sociales. Conferencia en las jornadas “Vivir en la Ciudad”. Centro de estudios antropológicos en contextos urbanos. U. N. Rosario.
- Grassi, E., Heintze, S., Neufeld, M. R., 1994: Políticas sociales, Crisis y ajuste estructural. Espacio editorial Bs. As.
- Lacabana, M. y Tuiran, R. 1992: Trabajo y pobreza: la precariedad laboral en el mercado urbano. En Cariola (coord..) Op. Cit.
- Margulis, M. y Tuiran, R., 1986: las unidades domesticas: participación en la actividad económica y estrategias de producción. En “desarrollo y producción en la frontera norte: el caso Reynosa”. El Colegio de México.
- INDEC, 1995: encuesta permanente de Hogares. Total de los aglomerados urbanos Octubre 1995. Información de prensa, Buenos Aires.
- INDEC, 1995^a: tabulados preliminares EPH, Buenos Aires.
- INDEC 1995b: Encuesta Permanente de Hogares. GBA Octubre 1995. Información de Prensa, Buenos Aires.
- Secretaria de Programación Económica, 1992: Primer Informe del estudio de la pobreza. Comunicado de Prensa. Buenos Aires.

(*) Licenciada (UBA, 1972) y Máster en Sociología (México, 1984). Especialista en Metodología de la Investigación Social (Venezuela, 1979). Profesora Titular a cargo del Seminario Anual de Investigación Sociocultural en el Departamento de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA (1988/96). Directora y codirectora de proyectos de investigación realizados en conjunto en los Institutos de Ciencias Sociales y Ciencias Antropológicas, UBA (1991/96). Investigadora en proyectos PID/CONICET (1988/90). Ha sido sucesivamente Asesora y Directora General de Planificación Educacional en la Secretaria de Planificación, Rectorado UBA (1988/92). Coordinadora y consultora en proyectos de asistencia técnica en organismos internacionales. Docente de grado y posgrado en epistemología y metodología de las ciencias sociales en Argentina, Bolivia, Venezuela y México. Ha dictado numerosos cursos en instituciones académicas y profesionales y es autora de diversos artículos y libros sobre temas de su especialidad.